

**1.6. DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CASTILLA-LA MANCHA
(pp. 2-17)**

—

**1.6. DRET I POLÍTQUES AMBIENTALS A CASTELLA-LA MANXA (pp. 18-
33)**

NURIA MARÍA GARRIDO CUENCA

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universidad de Castilla-La Mancha

Sumario: 1. Trayectoria y valoración general: El reto de la coherencia, *rectius* sostenibilidad en un contexto de crisis económica. 2. Legislación: adaptación de la normativa ambiental regional a la Directiva Bolkestein. 3. La creación del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha 4. Ejecución: nuevos planes y nuevas estrategias frente al cambio climático. 5. Otras medidas de ejecución de orden menor. 6. Problemas: cementerios nucleares, humedales, política hidráulica y el eterno dilema ecología *versus* desarrollo.

1. Trayectoria y valoración general

El periodo de análisis ha sido escaso en producción normativa, pero importante en medidas estratégicas relacionadas con las distintas vertientes de la lucha contra el cambio climático, con la elaboración de la Estrategia para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha y el proyecto ya sometido a información pública de un ambicioso Plan autonómico de Lucha contra el Cambio Climático que, sin embargo, no está suscitando tantas adhesiones como las que inicialmente se previeron. Llamamos aquí la atención simplemente en la retirada de la firma de este último Pacto por diversos grupos ecologistas, denunciando su incompatibilidad con la estrategia energética para el periodo 2009-2012.

Por otro lado, como se ha señalado en otro lugar¹, la innovación más destacable producida en nuestra Comunidad Autónoma el año pasado, fue la pérdida de identidad de la Consejería de Medio Ambiente y la disgregación de sus servicios administrativos y entes públicos asociados entre las Consejerías de Industria y Agricultura. Y junto a ello las reticencias, manifestadas tempranamente, al ver en esta desnaturalización un retroceso en el ámbito ambiental frente a las políticas desarrollistas de infraestructuras, urbanismo y explotación de recursos naturales. La valoración de la trayectoria general de este año puede confirmar algunas consecuencias negativas. De ellas destacaríamos la actual crisis organizativa y de actuación atravesada por el Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, que no ha podido emprender acciones programadas, como la ampliación de la Red de Espacios Naturales Protegidos. Pero también los incumplimientos del Plan Regional contra el veneno y la sostenibilidad de la práctica de la caza, que exigen imperiosamente una revisión en profundidad del modelo de gestión cinegética que impera en nuestra Comunidad Autónoma.

Por otro lado, y a pesar de la bondad de estos dos últimos años hidrológicos, otra vez el

¹ GARRIDO CUENCA, N., DELGADO PIQUERAS, F., “Castilla-La Mancha: tentaciones desarrollistas como remedio a la crisis económica”, López Ramón, F. (coord.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2009*, Thomson-Aranzadi, 2009, pp. 445ss.

agua ha sido fuente de conflicto. Primero por la inconclusa aprobación del proyecto de reforma de Estatuto de autonomía, paralizado por el desacuerdo de las regiones vecinas en torno al fin del trasvase Tajo-Segura e incluso respecto a la reserva de recursos hídricos que, como elemento de negociación, fue introducida por Castilla-la Mancha a imagen y semejanza de otros Estatutos ya aprobados con idénticas pretensiones y ninguna reticencia. También porque aún estamos a la espera de si los reiterados globos sonda del Gobierno sobre un nuevo trasvase del curso medio del Tajo a Levante se harán realidad. A lo que se suma, en fin, la crítica situación que atravesó este año el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Dicho esto, la única normativa del período que requiere un estudio específico es la autonómica Ley ómnibus —si se nos permite el símil con la conocida Ley estatal— que ha procedido a la modificación de diversas normas de contenido ambiental para su adaptación de la trasposición de la Directiva de servicios. Sin embargo, nos referiremos también aquí, en tanto se trata de la primera crónica normativa de Castilla-La Mancha a algunas disposiciones normativas o de planificación previas, producidas desde mediados del año 2009, que creemos pueden resultar de interés e ilustrativas para la comprensión del semestre analizado².

2. Legislación: adaptación de la normativa ambiental regional a la Directiva Bolkestein.

La primera norma a que debemos referirnos es la Ley 7/2009, de 17 diciembre, de mercado interior, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12-12-2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. Esta Directiva, traspuesta a nuestro ordenamiento mediante la Ley 17/2009, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (la conocida como Ley Paraguas) y la Ley 25/2009 de modificación de la legislación estatal para la adaptación normativa sectorial afectada (la Ley ómnibus), exige la adopción por las Comunidades Autónomas de las medidas normativas y ejecutivas necesarias para la acomodación a la legislación básica. Este segundo escalón necesario al proceso de trasposición de la norma comunitaria debe conllevar una valoración de los

² En líneas generales, este estudio se basa en la crónica anual del año 2009 que se publicará en la edición periódica del *Observatorio de Políticas Ambientales*, coordinado por el profesor Fernando López Ramón.

procedimientos y los títulos habilitantes autonómicos, con el objeto de decretar su compatibilidad con lo dispuesto en la Directiva y en la Ley paraguas. Nuestra autonomía ha sido de las últimas en proceder a esta adaptación. Lo que no consideramos censurable, sino más bien prudente y acertado pues, al esperar a la normativa estatal de referencia, ha evitado incorrecciones y carencias apreciables en otras adaptaciones autonómicas precipitadas, por un lado. Y, por otro, también ha esquivado la incorrecta técnica legislativa de utilización de las impertinentes y nada seguras, desde el punto de vista jurídico, “leyes de acompañamiento” para la adaptación pertinente.

Como señala la Exposición de Motivos, esta Ley autonómica responde a la necesidad de adaptación de sus normas con rango de Ley a la legislación básica estatal, debiendo tenerse en cuenta “cuando afecte a sectores de actividad en los que la Comunidad Autónoma no tiene competencias exclusivas”. Redacción, a nuestro entender, no muy afortunada, pues en el articulado son reformadas principalmente normas dictadas en virtud de títulos autonómicos exclusivos (léase, agricultura, ganadería, ordenación del turismo).

No vamos a entrar aquí en los problemas de articulación normativa que presenta la trasposición de mercado interior de servicios. Pero lo cierto es que el proceso se aventura particularmente dificultoso en este terreno y corresponderá a los distintos entes implicados alcanzar los fines perseguidos con el debido respeto a la distribución constitucional de competencias. Que, dicho sea de paso, es obviamente evitado por la norma comunitaria, pero tampoco resuelto en las normas estatales básicas de referencia que, como la Directiva, fijan su punto de mira en las implicaciones sustanciales y meramente cuantitativas de los mercados de de servicios, orillando los inevitables problemas que plantean sectores materialmente afectados cuyas competencias, en su mayor parte, son concurrentes entre Estado, Comunidades Autónomas y, no lo olvidemos, Corporaciones Locales.

Como ya se ha señalado³ será quizás el principio de validez general de las

³ LINDE PANIAGUA, E., “Libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior”, *Revista de Derecho de la Unión Europea*, núm. 14, 2008, p. 93; PAREJO ALFONSO, L., “La desregulación de los servicios con motivo de la Directiva Bolkstein”, *El cronista del Estado social y democrático de Derecho*, núm. 6, junio 2009; NOGUEIRA LÓPEZ, A., *Público y privado en el control operativo de actividades de servicios y nuevo campo para las entidades colaboradoras de la Administración* (ponencia defendida en el marco del V Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, celebrado en Cádiz en febrero de 2010, que puede consultarse en línea, en: www.aepda.es); de la misma autora, “Entidades colaboradoras con la Administración, libre prestación de servicios y régimen de control previo de actividades”, *Revista*

autorizaciones en todo el territorio el que más inconvenientes plantee desde el punto de vista de la descentralización política y administrativa, pues estas autorizaciones generales solo existen cuando se otorgan por el Estado. Además, y esto nos afecta especialmente, las Comunidades Autónomas no tienen únicamente competencias de ejecución en materia ambiental (lo que permitiría alcanzar ese objetivo genérico de validez territorial de la autorización), sino que sus competencias son de desarrollo y para dictar normas adicionales de protección. Aparte de que multitud de ámbitos competenciales concurrentes (obras públicas, agricultura, industria...) tienen marcos normativos singulares que difícilmente admitirían —sin respetar el orden competencial establecido— la validez general de las autorizaciones preconizada como principio basilar de las Leyes paraguas y ómnibus. En fin, un repaso a la jurisprudencia constitucional nos obliga a concluir que, “en general, debemos considerar que cuando el Estado no tiene una competencia ejecutiva sobre un determinado sector competencial, no puede prevalecer un único modelo administrativo”⁴.

En definitiva, grandes dudas se ciernen sobre nuestro modelo de policía administrativa tradicional también desde la perspectiva del orden constitucional de división territorial. Cuestión esta que deberemos afrontar con la serenidad que se merece una vez pase la borrasca que se ha precipitado en el ámbito puramente material y efectista del mercado único.

En lo que a nuestro estudio interesa, las modificaciones más significativas parten del art. 32.2. del vigente Estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, que otorga competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias, pastos y espacios naturales protegidos.

Para adaptar nuestra normativa, la Ley 7/2009 modifica el art.8 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, adaptando —de acuerdo a la norma básica estatal modificada por la Ley 25/2009 (art.15.5 Ley de Montes) y en términos idénticos— los procedimientos de concesión y autorización para actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales a los principios de publicidad,

Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 16, 2009. pp. 11ss; GONZÁLEZ GARCÍA, J. V., “La trasposición de la Directiva de servicios: Aspectos normativos y organizativos en el Derecho Español”, *Revista Española de Derecho Europeo*, num. 32, 2009, pp. 469-506; y LAGUNA DE PAZ, J. C., “Directiva de servicios. El estruendo del parto de los montes”, *El cronista del Estado social y democrático de Derecho*, núm. 6, junio 2009.

⁴ *Vid.* PADRÓS REIG, C., “Las entidades ambientales colaboradoras”, *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, núm. 16, 2009.

objetividad, imparcialidad y transparencia. Sometiéndose además al principio de concurrencia competitiva los supuestos de: a) actividades de servicios promovidos por la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de planificación y gestión del mismo y b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.

También con idéntica redacción, los criterios para la concesión y autorización deben estar directamente vinculados a la protección del medio ambiente.

Asimismo, introduce la limitación de la duración de las concesiones (reservadas, como es sabido, a la utilización privativa del dominio público forestal) y autorizaciones, prohibiendo las renovaciones automáticas y el otorgamiento de ventajas a favor del anterior titular o personas especialmente vinculadas con él. En desarrollo de esta previsión, la norma autonómica concreta la vigencia máxima de los títulos concesionales y autorizaciones a 30 años, renovable por iguales periodos máximos hasta un límite total de 75 años, incluyendo los 30 primeros, pudiendo ser suspendidas temporalmente o revocadas cuando de las mismas se deriven daños y perjuicios no previstos al otorgarse. Y advirtiendo que, en cualquier caso, los terrenos afectados por tales cargas no perderán su naturaleza demanial.

La otra innovación respecto a la norma básica estatal es la previsión contenida en el nuevo apartado 6 del art. 8, que concreta la prohibición de otorgamiento de la concesión de uso del dominio público forestal para cualquier proyecto sometido al procedimiento de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental sin la previa emisión de informe por el órgano forestal. Aunque en realidad este apartado se introduce en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta de la Ley 25/2009 (dictada con carácter básico), que impone la previa evaluación ambiental con toda la documentación que así lo acredite en los proyectos que, de acuerdo a la Ley de Evaluación de Impacto (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero) o normativa autonómica de desarrollo, así lo impongan.

La segunda norma afectada por la Directiva de servicios es la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias. Se añade un nuevo párrafo al art. 32, sustituyendo la autorización para la ocupación de instalaciones desmontables vinculadas a una actividad de servicios que sean necesarias para el ejercicio de las actividades complementarias por una declaración responsable. Lo que, tal cual justifica la Exposición de Motivos de la Ley autonómica de adaptación, supondrá una reducción de cargas administrativas —ejemplo de otro de

los pilares de la reforma general, la simplificación de procedimientos— al quedar eliminado el expediente de ocupación correspondiente a dichas instalaciones. En idénticos términos que en la ley básica estatal de referencia, el plazo para la presentación de la declaración responsable es de 15 días de antelación como mínimo, para que la Consejería pueda comprobar su pertinente compatibilidad. También como la ley estatal se añaden dos supuestos al régimen sancionador anterior, para tipificar como infracciones graves (letras j) y k) en el apartado 3 del artículo 41): la no presentación de declaración responsable o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la declaración responsable para el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el ejercicio de la misma; y la inexactitud, falsedad u omisión de los datos, manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la declaración responsable.

3. La creación del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha

La innovación más relevante del periodo analizado es la creación de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha mediante Ley 6/2009 de 17 de diciembre, siguiendo la senda de otras Comunidades Autónomas. El nuevo organismo autónomo, adscrito al órgano del Consejo de Gobierno responsable de la Coordinación Hidrológica, se configura como la nueva Administración Hidráulica de Castilla-La Mancha.

Esto es, con su creación se pretende reorganizar, unificar y concentrar en un único instrumento dentro de la Administración autonómica todas las competencias en materia hidráulica que actualmente estaban repartidas en distintas Consejerías y las que, como órgano de gestión de infraestructuras de abastecimiento y depuración, se atribuían a la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla-La Mancha (creada por Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del Ciclo Integral del Agua de la región, y que ahora pasa a denominarse “Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha”, adscribiéndose a la Agencia del Agua a través de su Dirección-Gerencia, manteniendo su personalidad jurídica y capacidad de obrar). Propósito que, en principio, nos parece perfectamente legítimo y que además intenta dar cumplida cuenta de los ambiciosos objetivos de la Directiva Marco del Agua, tanto en cuanto a la integración de la política hidráulica en el resto de políticas sectoriales, como en la exigencia del uso sostenible, responsable y eficiente del recurso.

En este marco, y en virtud de las competencias constitucionales y autonómicas (arts. 31.1.1 y 39.3 EACM y 148 y 149 CE), la Ley de creación de la Agencia persigue tres grandes objetivos que, de acuerdo a la Exposición de Motivos, son: 1) conseguir una política activa de uso sostenible del agua, mediante la programación, aprobación, ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas; 2) la defensa y protección de los recursos hídricos en coordinación con el resto de organismos y administraciones públicas; y 3) contribuir a la ordenación del territorio, partiendo de la consideración del agua como elemento dinamizador del progreso y el desarrollo económico y social, compatibilizándolo con la protección del medio ambiente. De ahí la amplitud de sus funciones y competencias concretadas en el art. 2 de la Ley.

En cuanto a su estructura orgánica (Capítulo II de la Ley) no encontramos novedades relevantes que la singularicen respecto a otras Agencias autonómicas creadas con anterioridad. En su organización interna se concitan los distintos intereses implicados, exigencia impuesta por lo demás en la legislación estatal de aguas: administración regional, provincial y, lo que es más importante, los interesados y usuarios. Siendo tres los niveles de organización de la agencia:

- a) estructura regional con tres órganos: Presidencia, Consejo de Administración (como órgano superior de planificación y programación) y la Dirección-Gerencia;
- b) descentralización local: Servicios Provinciales para el desempeño de sus funciones en este ámbito territorial;
- c) un órgano consultivo y de participación en materia de agua integrado por: representantes de la Administración Regional y Local, de los usuarios de todas las Demarcaciones Hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha (abastecimiento, agrícolas, ganaderos, industriales, forestales y recreativos) que deben ser al menos un tercio del total del Consejo, más los representantes de las organizaciones empresariales, sociales, medioambientales, universidades y expertos de reconocido prestigio en materia de aguas. La regulación de sus funciones, composición y funcionamiento se remiten a la Ley y resto de normas que definitivamente desarrollen y aprueben el Estatuto de la Agencia y de sus distintos órganos auxiliares.

En fin, nos parece destacable la justificación de la estructura de la Agencia que se introduce en el penúltimo considerando de su Exposición de Motivos, con un trasfondo político evidente que refleja las vicisitudes por las que ha tenido que pasar —y sigue pasando— nuestra situación hídrica y las deficiencias de participación en los órganos colegiados del agua que Castilla-La Mancha viene denunciando desde tiempo ha sin demasiados resultados. En este párrafo se señalan hechos tan obvios como reales, pero implícitamente nos sugiere un nuevo escenario de actuación por el que la Comunidad Autónoma está apostando. Por más que haya que esperar a la aprobación final de nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, todavía pendiente en las Cortes Generales justamente por la falta de acuerdo respecto a sus reivindicaciones legítimas en materia hídrica —por cierto, idénticas a las que otros Estatutos de nueva hornada han incorporado sin tantos obstáculos—.

Pensando en la resolución final de este conflicto, es oportuna la previsión pro futuro de la Exposición de Motivos y del art. 2.1 de la Ley al advertir de la vigencia de la norma y de la estructura organizativa prevista tanto para el ejercicio de las competencias actuales como para las que en el futuro pudiera asumir, se transfirieran o pasaran a gestionarse por la Agencia del Agua castellano-manchega. No está de más recordar que el Proyecto de reforma de nuestro Estatuto de autonomía prevé la creación de esta Agencia en el art. 105 como contenido de las competencias de su sección primera, “La política del agua”.

Por otro lado, la discutible decisión orgánica de eliminar del Gobierno autonómico la Consejería de Medio Ambiente y repartir sus competencias entre Industria y Agricultura no auguraba buenos presagios sobre el desarrollo concreto de determinadas políticas ambientales en Castilla-La Mancha. Aunque pudieran citarse otros ejemplos, queremos llamar aquí la atención sobre la crisis crónica que está padeciendo el Organismo Autónomo de Espacios Naturales. Con una dirección interina después del cese de su anterior directora (D^a Ana Terol) y la falta de presupuesto efectivo para inversión (dedicado exclusivamente a saldar deudas anteriores), no ha podido renovar prácticamente ningún convenio con ayuntamientos ni otras organizaciones, y se ha visto obligado a retrasar la tramitación y aprobación de nuevas iniciativas ambientales ya comprometidas en la Comunidad Autónoma (como la ampliación de la Red de Espacios Protegidos o el Plan de Recuperación del Aguila Perdicera). Además, empieza a resultar preocupante su relegación en asuntos de trascendencia ambiental indudable (nuevos

Planes eólicos, política de incendios en espacios protegidos, o los problemas de sostenibilidad de los planes de caza por empleo de venenos nocivos).

4. Ejecución: nuevos planes y nuevas estrategias frente al cambio climático.

Tres son las novedades más destacables de este periodo. Por un lado, la aprobación del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha para el horizonte temporal 2009-2012 mediante Decreto 179/2009, de 24 de noviembre. En el marco de las políticas contra el cambio climático, son dos las acciones estratégicas: la Estrategia Marco para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, cuyo proyecto se está sometiendo a los diferentes trámites de información y participación requeridas para su aprobación.

El Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019 sustituye al anterior Plan de 1999 (Decreto 70/1999, de 25 de mayo) cuya vigencia acababa este año 2009. Una vez establecidas las herramientas básicas de organización, gestión e infraestructuras, el nuevo Plan pretende ordenar la gestión de residuos urbanos hasta el año 2019, adaptándola a las tendencias más actualizadas en relación con la prevención en la generación y a una gestión sostenible. La revisión producida era necesaria para incorporar los nuevos condicionantes de carácter normativo que han surgido desde 1999 y adaptarlos a las peculiaridades de nuestra Comunidad Autónoma. Fundamentalmente por las revisiones producidas en la Ley estatal 10/1998, de 21 de abril de Residuos con su normativa de desarrollo y en la nueva Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre Residuos, así como en la nutrida política europea sobre la materia.

Claramente inspirado en este cuerpo normativo, el Plan se dicta en virtud de las competencias atribuidas a la Junta de Comunidades en su art. 32.7 y de conformidad con la norma estatal que remite a las autoridades autonómicas la elaboración de los Planes autonómicos de residuos, la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos y a las entidades locales, como servicio obligatorio, la recogida, transporte y eliminación de residuos, pudiendo elaborar sus propios planes de gestión siempre ajustándose a lo dispuesto en el Plan regional. A su vez, la nueva Directiva de 2008 obliga a los Estados a establecer medidas de protección ambiental y salud humana mediante la prevención y reducción de los impactos adversos

de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora y eficiencia de su uso. En concreto, el art. 28 de la Directiva determina que los Estados miembros garantizarán que sus autoridades competentes establezcan los planes de residuos necesarios regulando los principios básicos que deben contener.

Muy resumidamente, el segundo Plan de Gestión de Residuos Urbanos tiene una vigencia de 10 años y supondrá una inversión de 223 millones de euros entre inversión pública y privada. En cumplimiento de las directrices de la política de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, este Plan supondrá un importante avance, al prever la reducción hasta en un 11%, en el horizonte 2019, la generación de residuos urbanos mediante la aplicación de los siguientes principios básicos: a) prevención en la generación de residuos con programas eficaces de educación ambiental, concienciación y sensibilización. Es destacable que es el primer Plan autonómico español que incorpora un auténtico programa de prevención de acuerdo con la nueva directiva europea sobre residuos; b) Reutilización, reciclaje y valorización energética; c) Eliminación.

Al tiempo, el Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete con el Pacto contra el Cambio Climático, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la aminoración del volumen de residuos que terminan en vertedero, como consecuencia de la prevención en su generación y de la optimización de los Centros de tratamiento. La reducción progresiva deberá adaptarse a estas previsiones: del 64% en 2012; del 73% en 2015; del 75% en 2019. Al tiempo, se triplicará la eficacia de las plantas de tratamiento, previendo la reducción de hasta un 75% el volumen de residuos con destino al vertedero y por tanto el impacto ambiental de los mismos.

El Plan tiene previstas tres fases de aplicación y contempla conseguir al final del periodo de ejecución los siguientes objetivos: evitar la generación de 65 Kg. por habitante/año; el reciclado de 159 Kg. habitantes/año; que la recogida de materia orgánica llegue al 45%; que el vertido final a vertedero no supere los 111 Kg. por habitante/año; la recogida del 80 % del aceite vegetal usado para su tratamiento; universalización de la Red de Puntos limpios, con la construcción de 177 nuevos; que las emisiones de gases de efecto invernadero, generadas por vertederos se reduzcan de las 314,8 miles de Toneladas, que se emitirían si no se aprueba el Plan a las 79,6 miles

de Toneladas, lo que supone una reducción de 74,7% de las emisiones al final del periodo.

En fin, debe señalarse que este Plan se complementa con los siguientes: Plan de Residuos de Construcción y Demolición; Plan de Lodos de Depuradoras y Plan de Residuos Industriales (en elaboración, y que sustituirá al actual Plan de Residuos Peligrosos).

Por otro lado, a la espera de su aprobación final, destacamos que durante este periodo se ha elaborado el documento que contiene la “Estrategia de Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático en Castilla-La Mancha”, cuyo borrador ha sido sometido a información y participación pública en el Diario Oficial hasta el 23 de enero de 2010. Este documento es fruto del Pacto Regional de Desarrollo Sostenible firmado el 7 de octubre de 2009. Cuenta con un total de 290 medidas, de las que 220 son de mitigación, 65 de adaptación y 5 de cooperación al desarrollo, tiene por objetivo primero la reducción de la emisión regional de CO₂ en 3,2 millones de toneladas en el horizonte 2012. Además, contiene un panel de 46 indicadores para realizar el seguimiento y evaluación de las estas medidas, así como de un proceso de revisión para reajustar objetivos y medidas hasta 2020 en función de la evaluación y los posibles compromisos del Gobierno de España y de la Unión Europea.

La elaboración del Pacto ha contado con un alto grado de participación: de los agentes sociales y económicos de Castilla-La Mancha, las Administraciones Locales, la Universidad regional, asociaciones de vecinos y consumidores, asociaciones agrarias y ecologistas —aunque finalmente estos se han retirado de la firma de la Estrategia—, partidos políticos e, incluso, ciudadanos particulares que se han ido sumando a lo largo de estos dos meses. El borrador de la Estrategia es un documento de trabajo que puede consultarse en las dependencias de la Oficina de Cambio Climático de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, además de en la página Web del Gobierno de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), donde los interesados pueden remitir las sugerencias vía correo electrónico en aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

En esta línea debe destacarse la Estrategia Marco para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha (plan temporal 2009-2012), que se enmarca en las medidas de desarrollo y aplicación de la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha,

con la que nuestra región se convirtió en la primera Comunidad Autónoma en otorgar la máxima cobertura legal a las acciones relacionadas con esta materia.

La Estrategia Energética pretende impulsar un nuevo modelo productivo, tal como se recoge en el pacto por Castilla-La Mancha firmado por el presidente Barreda con los agentes sociales, los empresarios y las Diputaciones durante este año. Un modelo económico “basado en la sostenibilidad, en la producción de energías limpias, que contribuyan a paliar los efectos del cambio climático, y el fomento y consolidación de una industria innovadora y competitiva”.

La Estrategia se centra en 3 ejes:

1.-Fomento de la producción de energía procedente de fuentes renovables. Con el horizonte temporal 2012, los objetivos son:

- que el 100% de la energía eléctrica que se consuma proceda de fuentes renovables, con una inversión prevista de alrededor de 9.000 millones de euros. (Actualmente el 70% de la energía eléctrica procede de fuentes renovables);

- que el 37% de la energía eléctrica producida provenga de fuentes renovables.

2.- Ahorro y Eficiencia Energética, con estas medidas: incrementar la eficiencia energética de nuestras empresas; puesta en marcha de planes sectoriales de ahorro energético; disminución de emisiones de CO₂ a la atmósfera.

Hasta el año 2012 el Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración con el IDAE, va a invertir más de 110,5 millones de euros en políticas de ahorro y eficiencia energética, que ya se están traduciendo en medidas concretas, como la inversión de 14,6 millones de euros en mejorar la eficiencia de servicios públicos o la eficiencia energética de edificios públicos en más de 500 ayuntamientos, las auditorías energéticas en 200 edificios de la Junta de Comunidades, los 100.000 castellano-manchegos que han cambiado sus electrodomésticos por otros más eficientes gracias al Plan Renove con una inversión de 9,4 millones de euros o los más de 6 millones invertidos en impulsar sistemas de transporte alternativos y en ayudar a modernizar las flotas de algunas industrias y vehículos particulares a través de las convocatorias para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en el sector del transporte.

3.- Incrementar el peso económico de los activos energéticos en la economía de Castilla-La Mancha: nuestra Comunidad Autónoma produce el 7,8% de la energía

eléctrica nacional (datos consolidados de 2008), pero consume el 4,3%, lo que nos convierte en una región excedentaria en energía, exportando 10.708 GWh. El objetivo es consolidar esta situación, con un objetivo de crecimiento en el valor de la energía exportada hasta 1.650 millones de euros, así como del Valor Añadido Bruto del sector energético en un 15%.

Sin embargo, esta Estrategia Marco no cuenta con todos los parabienes de la sociedad y, sobre todo, de los colectivos ecologistas. Hasta el punto que es justamente su aprobación la que ha motivado el abandono y la retirada de la firma de éstos en la Estrategia de Cambio Climático que acabamos de analizar, por considerarla incompatible con los presupuestos insostenibles de la Estrategia para el desarrollo energético que intenta justificar la imposibilidad de reducción de las emisiones en nuestra región (dada su dependencia en la producción de energía de las térmicas y del transporte viario). Según se ha denunciado, la apuesta castellano-manchega por el incremento de centrales térmicas o nucleares, nuevas industrias contaminantes e infraestructuras de transporte por carretera supondrá un incremento encubierto del exceso de emisiones de CO₂ hasta los 5,5 millones de toneladas en el año 2012 (todo ello cuando ya en 2007 nuestra Comunidad Autónoma fue la cuarta en emisiones GEI por habitante y la emisión de 28 millones de toneladas equivalente de CO₂ alejándose de los objetivos de Kyoto en más del 30%).

5. Otra medidas de ejecución de orden menor

En este periodo, también han sido modificadas algunas normas ejecutivas de acuerdo a criterios transversales de orden medioambiental. Sin detenernos demasiado en ellas, cabe citar: la Orden de 19 de enero de 2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, modificando la anterior Orden de 14 de noviembre de 1994, para declarar la trucha común especie de interés preferente y establecer la delimitación de aguas trucheras. Y ello de acuerdo a las exigencias impuestas por la Ley 1/1992, de 7 de mayo de Pesca Fluvial de Castilla-La Mancha establece entre sus objetivos la protección, la conservación, el fomento y el ordenado aprovechamiento de los recursos de la pesca en los cursos y masas de agua de la Región.

También en base al art. 27 de la Ley de Pesca Fluvial, que dispone el establecimiento anual por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Orden de Vedas, la

Orden de 20 de enero de 2010 recoge la relación de especies objeto de pesca, las épocas hábiles, tallas límite de captura, el número máximo de capturas por pescador y cebos autorizados para cada especie, las especies comercializables y las limitaciones y prohibiciones especiales, así como la delimitación y reglamentación establecida para las aguas en régimen especial y refugios de pesca establecidos en los distintos cursos y masas de agua del ámbito territorial de Castilla-La Mancha. Este tipo de normas tienen una especial importancia desde el punto de vista medioambiental, pues de todos es conocida la influencia que la fauna puede tener para la conservación y mantenimiento futuro del valor ecológico de las masas hídricas. Así, tras las propuestas elaboradas por las correspondientes Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural e informadas por los respectivos Consejos Provinciales de Pesca y oído el Consejo Regional de Pesca, la Orden regula, siguiendo un criterio territorial provincial: las especies pescables, invasoras o exóticas (con especial atención en el cangrejo rojo) y amenazadas, periodos hábiles, cebos admitidos y prohibidos dependiendo de la especie y de su influencia en las condiciones hidrológicas de los distintos cursos de agua, cupos de captura, comercialización y las disposiciones relativas a moratorias temporales y prohibiciones especiales.

En fin cabe destacar la Ley 1/2010 de 11 de marzo, de Regulación de la tasa para concesión de la etiqueta ecológica en Castilla-La Mancha, que desarrolla en el ordenamiento autonómico las previsiones comunitarias relativas a este canon, en aplicación del Reglamento (CE) 66/2010, del Parlamento Europeo del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Esta norma, como es sabido, pretende promover productos y servicios que puedan reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros productos de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos, a incentivar su uso y a un elevado nivel de protección del medio ambiente. En este contexto, la celebración de un contrato con el solicitante de la etiqueta y el pago de un canon de concesión de la misma constituye el presupuesto mismo de la concesión de la etiqueta ecológica en relación a un producto concreto, canon cuya cuantía se fija en el marco normativo establecido por el propio Reglamento (CE) nº 66/2010 de 25 de noviembre de 2009.

La cuantía de la tasa se fija en 200 euros por solicitud, quedando encargados de su gestión los órganos de la Consejería competentes en materia de medio ambiente. Aunque esta cuantía será objeto de bonificación del 20% para los sujetos pasivos que

acrediten disponer de la validación por el Reglamento EMAS o certificación por la Norma ISO 14001, y se comprometan, en su política medioambiental, a incorporar una referencia expresa al cumplimiento de los criterios de la etiqueta ecológica que han servido de base a la concesión.

Por último, esta misma Ley 1/2010, en su Disposición Final Primera procede a la modificación de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha. Y en concreto, su art. 48 para establecer como plazo máximo resolver y notificar la resolución de los procedimientos sancionadores referidos a las infracciones graves y muy graves el de un año desde el inicio del procedimiento, y de tres meses para las leves.

6. Problemas: cementerios nucleares, trasvases y humedales, política hidráulica y el eterno dilema ecología *versus* desarrollo

Como en tantos otros terrenos, la coyuntura de crisis económica ha sido un factor determinante en el año 2009 y es de esperar que lo seguirá siendo durante el siguiente también para la política ambiental. Si por una parte aquella ha aparcado algunas amenazas, como la expansión urbanística, de otra puede alentar la tentación social y política de sacrificar la tutela ambiental en aras a una mayor recuperación económica.

Ejemplo paradigmático surgido en este periodo ha sido la presentación de las candidaturas de Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca) para la instalación del Almacén Temporal de Residuos Nucleares (ATC, coloquialmente denominado “cementerio nuclear”), destinado a albergar los residuos radioactivos de las centrales nucleares españolas durante sesenta años. Y, como cabía esperar, se ha convertido en motivo de controversia.

A la cabeza de la oposición se ha colocado el Gobierno autonómico, incidiendo en una recurrente estrategia de legitimación política regional. Aparte de los eventuales riesgos de una instalación de este tipo (seguridad, salud, traslado), en los casos de los dos municipios regionales candidatos se aduce la existencia de importantes valores ecológicos. Por su parte, el Ministerio de Industria y ENRESA prometen compensaciones económicas millonarias: seis millones de euros anuales al municipio que lo albergue y otros tantos a la comarca. Habrá que esperar todavía para saber cómo

se resuelve este conflicto de indudables repercusiones ambientales, pues del mismo depende el funcionamiento de las centrales nucleares.

Desde el prisma del desarrollo sostenible, siguen cuestionados los proyectos de autovía Toledo-Ciudad Real y Cuenca-Teruel. Respecto del primero, tras la declaración de impacto negativo por el Ministerio de Medio Ambiente al proyecto inicial, los tres trazados alternativos no aportan diferencias significativas, pues suponen abrir un nuevo corredor de comunicación viaria en zonas de alto valor ecológico que forman parte de la RED Natura 2000 (los ZEPA y LIC de los Montes de Toledo). A la espera de que la Consejería se pronuncie sobre la DIA del proyecto, son cada vez más las voces que reclaman su reconsideración. El eventual fraccionamiento de esta infraestructura para evitar una declaración completa del impacto sería, a nuestro juicio, un claro fraude de ley, que deberá seguirse atentamente.

Por otro lado, la situación más crítica de la historia del PN de las Tablas de Daimiel, agravada por el incendio de las turberas en octubre de 2009, intentó en un principio ser atajada mediante un trasvase de emergencia desde del Tajo a través de la llamada “tubería manchega”. Empero, la recuperación total del encharcamiento se ha logrado merced a un inusualmente lluvioso invierno. Aunque ambos son hechos positivos, es claro que no constituyen la solución definitiva al déficit estructural que padecen éste y otros humedales manchegos. De cara al objetivo de alcanzar un equilibrio de sostenibilidad —lo que implica, además de no comprometer el futuro de las generaciones venideras, atender las necesidades de las generaciones presentes— para estos ecosistemas, es prioritario el mantenimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Especial del Alto Guadiana, dentro de las dificultades presupuestarias actuales.

Con ser muy importante, no es sino uno más de los muchos problemas existentes en las cuencas hidrográficas a las que pertenece el territorio castellano-manchego. Vencida la fecha en que tendrían que haberse aprobado los nuevos planes hidrológicos, su elaboración se está encontrando con grandes dificultades. Especialmente en la Demarcación Hidrográfica Júcar, por la negativa de las Comunidades Autónomas concernidas a ejercer sus competencias estatutarias en las cuencas intracomunitarias. Detrás de los escollos jurídicos están, sin duda, las pretensiones materiales relativas al aprovechamiento de los recursos hídricos, pues la Generalidad Valenciana desdeña las alternativas ofrecidas por el Ministerio de Medio Ambiente (desaladoras, depuración y reutilización de aguas residuales, trasvase al Vinalopó, modernización de regadíos, etc.)

y, mientras llega el trasvase del Ebro, aspira a utilizar el Júcar para resolver los déficits estructurales de agua en el conjunto de esa Región. Lo cual pasaría por restablecer en su provecho el blindaje sobre la práctica totalidad de los caudales superficiales de la cuenca del Júcar que de facto ya disfruta y recortar las escasas dotaciones de aguas subterráneas con que sobrevive el regadío en La Mancha Oriental. Una vieja ambición que aparece ahora revestida del ecológico propósito de salvar la Albufera de Valencia, amenazada por la presión urbanística y por los vertidos urbanos y agrícolas contaminantes.

No podemos aventurar cuál será el desenlace final, pero es claro a nuestro juicio que una planificación hidrológica que, es deseable, sea consensuada y estable solo puede alcanzarse desde el respeto a la Constitución y sobre la base de un reparto equitativo, razonable y sostenible de los recursos hídricos.

Sumari: 1. Trajectòria i valoració general: el repte de la coherència, *rectius* sostenibilitat en el context de crisi econòmica. 2. Legislació: adaptació de la normativa ambiental regional a la directiva Bolkestein. 3. La creació del Consell de l'Aigua de Castella-la Manxa 4. Execució: nous plans i noves estratègies enfront del canvi climàtic. 5. Altres mesures d'execució d'ordre menor. 6. Problemes: cementiris nuclears, aiguamolls, política hidràulica i l'etern dilema "ecologia *versus* desenvolupament".

1. Trajectòria i valoració general

El període d'anàlisi ha estat escàs pel que fa a la producció normativa, però important quant a mesures estratègiques relacionades amb les diferents vessants de la lluita contra el canvi climàtic, amb l'elaboració de l'Estratègia per al Desplegament Energètic de Castella-la Manxa i el projecte que s'ha sotmès a informació pública de l'ambiciós Pla Autonòmic de Lluita contra el Canvi Climàtic, que, no obstant això, no suscita tantes adhesions com inicialment s'havia previst. Parem atenció aquí, simplement, en la retirada de la signatura d'aquest últim pacte per diversos grups ecologistes, en què denuncien la incompatibilitat amb l'estratègia energètica per al període 2009-2012.

D'altra banda, com s'ha assenyalat en un altre lloc⁵, la innovació més destacable que es va produir l'any passat a la nostra comunitat autònoma va ser la pèrdua d'identitat de la Conselleria de Medi Ambient i la disgregació dels seus serveis administratius i ens públics associats entre les conselleries d'Indústria i Agricultura. I al costat d'això, les reticències, que es van manifestar aviat, en veure en aquesta desnaturalització el retrocés en l'àmbit ambiental enfront de les polítiques desenvolupistes d'infraestructures, d'urbanisme i d'explotació de recursos naturals. La valoració de la trajectòria general d'aquest any pot confirmar unes quantes conseqüències negatives, de les quals en destacaríem la crisi actual organitzativa i d'actuació de l'Organisme Autònom Espais Naturals de Castella-la Manxa, que no ha pogut emprendre accions programades, com l'ampliació de la Xarxa d'Espais Naturals Protegits. Però també els incompliments del pla regional contra el verí i la sostenibilitat de la caça, que exigeixen imperiosament revisar profundament el model de gestió cinegètica que impera en la nostra comunitat autònoma.

D'altra banda, i malgrat la bondat d'aquests dos últims anys hidrològics, una vegada més l'aigua ha estat font de conflicte. Primer, per l'aprovació inconclusa del projecte de reforma de l'Estatut d'autonomia, paralitzat pel desacord de les regions veïnes entorn de

⁵ GARRIDO CUENCA, N., DELGADO PIQUERAS, F., "Castilla-La Mancha: tentaciones desarrollistas como remedio a la crisis económica", López Ramón, F. (coord.), *Observatorio de Políticas Ambientales 2009*, Thomson-Aranzadi, 2009, pp. 445ss.

la finalització del transvasament Tajo-Segura i, fins i tot, respecte a la reserva de recursos hídrics que, com a element de negociació, va ser introduïda per Castella-la Manxa a imatge i semblança d'altres estatuts que s'havien aprovat amb pretensions idèntiques i sense cap reticència. També perquè encara estem a l'expectativa de si els reiterats balons sonda del Govern sobre un nou transvasament del curs mitjà del Tajo a Llevant es faran realitat. A això s'hi suma, al capdavant, la situació crítica que ha passat aquest any el parc nacional de Las Tablas de Daimiel.

Dit això, l'única normativa del període que requereix un estudi específic és l'autonòmica llei òmnibus —si se'ns permet el símil amb la coneguda llei estatal—, que ha modificat diverses normes de contingut ambiental per adaptar-les a la transposició de la directiva de serveis. No obstant això, ens referirem també a algunes disposicions normatives o de planificació prèvies que s'han produït des de mitjans de l'any 2009 que creiem que poden resultar d'interès i que poden ser il·lustratives per comprendre el semestre analitzat, ja que es tracta de la primera crònica normativa de Castella-la Manxa⁶.

2. Legislació: adaptació de la normativa ambiental regional a la directiva Bolkestein

La primera norma a què hem de fer referència és la Llei 7/2009, de 17 de desembre, de mercat interior, per la qual es modifiquen diverses lleis per adaptar-se a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis del mercat interior. Aquesta directiva, transposada al nostre ordenament mitjançant la Llei 17/2009, sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (coneguda com a llei paraigua), i la Llei 25/2009, de modificació de la legislació estatal per a l'adaptació normativa sectorial afectada (la llei òmnibus), exigeix que les comunitats autònomes adoptin les mesures normatives i executives necessàries per acomodar-se a la legislació bàsica. Aquest segon esglaió, necessari en el procés de transposició de la norma comunitària, ha de comportar la valoració dels procediments i els títols habilitants autonòmics, amb l'objecte de decretar-ne la compatibilitat amb el que disposa la directiva i la llei paraigua. La nostra autonomia ha estat de les últimes a

⁶ En línies generals, aquest estudi es basa en la crònica anual de l'any 2009 que es publicarà en l'edició periòdica d'*Observatorio de Políticas Ambientales*, coordinat pel professor Fernando López Ramón.

adaptar-s'hi. El que no considerem censurable, sinó més aviat prudent i encertat, en esperar la normativa estatal de referència, ha evitat incorreccions i carències que s'aprecien en altres adaptacions autonòmiques precipitades, d'una banda. I, de l'altra, també ha esquivat la incorrecta tècnica legislativa d'utilització de les "lleis d'acompanyament", impertinents i no gens segures, des del punt de vista jurídic, per a l'adaptació corresponent.

Com assenyala l'exposició de motius, aquesta llei autonòmica respon a la necessitat d'adaptar les normes amb rang de llei a la legislació bàsica estatal, i s'ha de tenir en compte "quan afecta sectors d'activitat en què la comunitat autònoma no té competències exclusives". Redacció, al nostre entendre, no gaire afortunada, perquè en l'articulat principalment es reformen les normes que s'han dictat en virtut de títols autonòmics exclusius (llegiu agricultura, ramaderia, ordenació del turisme).

No entrarem aquí en els problemes d'articulació normativa que presenta la transposició de mercat interior de serveis. Però el cert és que el procés esdevé particularment difícil en aquest terreny i correspon als diferents ens implicats aconseguir els objectius que es persegueixen amb el degut respecte a la distribució constitucional de competències. De fet, diguem-ho de passada, la norma comunitària òbviament ho evita, però tampoc ho resolen les normes estatals bàsiques de referència que, com la directiva, fixen el seu punt de mira en les implicacions substancialment i merament quantitatives dels mercats de serveis, arrançant els problemes inevitables que plantegen sectors materialment afectats, les competències dels quals, majoritàriament, són concurrents entre Estat, comunitats autònomes i, no ho oblidem, corporacions locals.

Com ja s'ha assenyalat⁷, el principi de validesa general de les autoritzacions en tot el territori serà potser el que més inconvenients plantejarà des del punt de vista de la descentralització política i administrativa, perquè aquestes autoritzacions generals

⁷ LINDE PANIAGUA, E., "Libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior", *Revista de Derecho de la Unión Europea*, núm. 14, 2008, p. 93; PAREJO ALFONSO, L., "La desregulación de los servicios con motivo de la Directiva Bolkstein", *El cronista del Estado social y democrático de Derecho*, núm. 6, juny 2009; NOGUEIRA LÓPEZ, A., *Público y privado en el control operativo de actividades de servicios y nuevo campo para las entidades colaboradoras de la Administración* (ponència defensada en el marc del V Congrés de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Administratiu, realitzat a Cadis al febrer de 2010, que pot consultar-se en línia a: www.aepda.es); de la mateixa autora, "Entidades colaboradoras con la Administración, libre prestación de servicios y régimen de control previo de actividades", *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, núm. 16, 2009, pp. 11ss; GONZÁLEZ GARCÍA, J. V., "La trasposición de la Directiva de servicios: Aspectos normativos y organizativos en el Derecho Español", *Revista Española de Derecho Europeo*, núm. 32, 2009, pp. 469-506; i LAGUNA DE PAZ, J. C., "Directiva de servicios. El estruendo del parto de los montes", *El cronista del Estado social y democrático de Derecho*, núm. 6, juny 2009.

només existeixen quan l'Estat les atorga. A més a més, i això ens afecta especialment, les comunitats autònomes no tenen únicament competències d'execució en matèria ambiental (cosa que permetria aconseguir aquest objectiu genèric de validesa territorial de l'autorització), sinó que les seves competències són de desenvolupament i per dictar normes addicionals de protecció. A banda d'això, molts àmbits competencials concurrents (obres públiques, agricultura, indústria...) tenen marcs normatius singulars que difícilment admetrien —sense respectar l'ordre competencial establert— la validesa general de les autoritzacions que s'ha preconitzat com a principi basilar de les lleis paraigua i òmnibus. En fi, el repàs de la jurisprudència constitucional ens obliga a concloure que, “en general, hem de considerar que quan l'Estat no té competència executiva sobre un determinat sector competencial, no pot prevaler un únic model administratiu”⁸.

En definitiva, s'estenen grans dubtes sobre el nostre model de policia administrativa tradicional també des de la perspectiva de l'ordre constitucional de divisió territorial. Qüestió que haurem d'afrontar amb la serenitat que es mereix un cop passi la borrasca que s'ha precipitat en l'àmbit purament material i efectista del mercat únic.

Respecte del que interessa al nostre estudi, les modificacions més significatives parteixen de l'art. 32.2. de l'Estatut d'autonomia vigent de Castella-la Manxa, que atorga competència de desenvolupament legislatiu i execució en matèria de forestes, aprofitaments i serveis forestals, vies pecuàries, pastures i espais naturals protegits.

Per adaptar la nostra normativa, la Llei 7/2009 modifica l'art.8 de la Llei 3/2008, de forest i gestió forestal sostenible de Castella-la Manxa, ajustant —d'acord amb la norma bàsica estatal modificada per la Llei 25/2009 (art.15.5 llei de forest) i en termes idèntics— els procediments de concessió i d'autorització per a activitats de serveis que s'han de realitzar en muntanyes demanials als principis de publicitat, objectivitat, imparcialitat i transparència. A més a més, se sotmeten al principi de concurrència competitiva els supòsits següents: *a)* Activitats de serveis promoguts per l'administració gestora de la muntanya d'acord amb els instruments de planificació i gestió; *b)* Quan l'exercici de l'activitat exclou altres activitats de tercers.

⁸ Vid. PADRÓS REIG, C., “Las entidades ambientales colaboradoras”, *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, núm. 16, 2009.

També amb redacció idèntica, els criteris per a la concessió i l'autorització han d'estar directament vinculats a la protecció del medi ambient.

Així mateix, introdueix la limitació de la durada de les concessions (reservades, com és sabut, a la utilització privativa del domini públic forestal) i autoritzacions, i prohibeix les renovacions automàtiques i l'atorgament d'avantatges a favor de l'antic titular o persones especialment vinculades. En desplegament d'aquesta previsió, la norma autonòmica concreta la vigència màxima dels títols concessionals i de les autoritzacions a 30 anys, renovable per als mateixos períodes màxims fins a un límit total de 75 anys, incloent-hi els 30 primers, i es poden suspendre temporalment o revocar quan se'n derivin danys i perjudicis que no s'han previst en atorgar-se. I advertint que, en tot cas, els terrenys afectats per aquestes càrregues no perdran la seva natura demanial.

L'altra innovació respecte a la norma bàsica estatal és la previsió que conté el nou apartat 6 de l'art. 8, que concreta la prohibició d'atorgament de la concessió d'ús del domini públic forestal per a qualsevol projecte sotmès al procediment de la Llei 4/2007, d'avaluació ambiental sense l'emissió prèvia de l'informe de l'òrgan forestal. Tot i que, en realitat, aquest apartat s'introdueix en virtut del que disposa la disposició addicional cinquena de la Llei 25/2009 (dictada amb caràcter bàsic), que imposa l'avaluació ambiental prèvia amb tota la documentació que així ho acrediti en els projectes que, d'acord amb la llei d'avaluació d'impacte (Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener) o la normativa autonòmica de desenvolupament així ho imposin.

La segona norma afectada per la directiva de serveis és la Llei 9/2003, de vies pecuàries. S'afegeix un nou paràgraf a l'art. 32, que substitueix l'autorització per a l'ocupació d'instal·lacions desmuntables vinculades a una activitat de serveis necessàries per exercir les activitats complementàries per a la declaració responsable. Cosa que, com justifica l'exposició de motius de la llei autonòmica d'adaptació, suposarà reduir les càrregues administratives —exemple d'un altre dels pilars de la reforma general, la simplificació de procediments— en eliminar-se l'expedient d'ocupació corresponent a aquestes instal·lacions. Amb termes idèntics que en la llei bàsica estatal de referència, el termini per presentar la declaració responsable és de quinze dies d'antelació com a mínim, perquè la Conselleria en pugui comprovar la compatibilitat. També com en la llei estatal, s'afegeixen dos supòsits al règim sancionador anterior, per tipificar com a infraccions greus (lletres j) i k) en l'apartat 3 de l'article 41): la no-presentació de declaració responsable o l'incompliment de les

previsions que conté la declaració responsable per exercir una determinada activitat o de les condicions que imposa l'Administració per exercir-la; i la inexactitud, la falsedat o l'omissió de les dades, les manifestacions o els documents que acompanyin la declaració responsable o que s'hi incorporin.

3. La creació del Consell de l'Aigua de Castella-la Manxa

La innovació més rellevant del període que s'ha analitzat és la creació de l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa mitjançant la Llei 6/2009 de 17 de desembre, seguint el camí d'altres comunitats autònomes. El nou organisme autònom, adscrit a l'òrgan del Consell de Govern responsable de la coordinació hidrològica, es configura com la nova Administració hidràulica de Castella-la Manxa.

Amb la seva creació es pretén reorganitzar, unificar i concentrar en un únic instrument en l'Administració autonòmica totes les competències en matèria hidràulica que actualment estaven repartides en diferents conselleries i les que, com a òrgan de gestió d'infraestructures d'abastament i depuració, s'atribuïen a l'entitat de dret públic Aigües de Castella-la Manxa (creada per la Llei 12/2002, de 27 de juny, reguladora del cicle integral de l'aigua de la regió, i que ara s'anomena Infraestructures de l'Aigua de Castella-la Manxa, i s'adscriu a l'Agència de l'Aigua a través de la seva direcció-gerència, mantenint la personalitat jurídica i capacitat d'obrar). Propòsit que, en principi, ens sembla perfectament legítim i que, a més a més, intenta donar compte dels ambiciosos objectius de la directiva marc de l'aigua, tant pel que fa a la integració de la política hidràulica en la resta de polítiques sectorials, com a l'exigència de l'ús sostenible, responsable i eficient del recurs.

En aquest marc, i en virtut de les competències constitucionals i autonòmiques (art. 31.1.1 i 39.3 EACM i 148 i 149 CE), la llei de creació de l'Agència persegueix tres grans objectius, que, d'acord amb l'exposició de motius, són: 1) Aconseguir una política activa d'ús sostenible de l'aigua, mitjançant la programació, l'aprovació, l'execució i l'explotació d'infraestructures hidràuliques; 2) Defensar i protegir els recursos hídrics en coordinació amb la resta d'organismes i administracions públiques; 3) Contribuir a l'ordenació del territori, partint de la consideració de l'aigua com a element dinamitzador del progrés i el desenvolupament econòmic i social, compatibilitzant-ho

amb la protecció del medi ambient. D'aquí ve l'amplitud de les seves funcions i competències que concreta l'art.2 de la llei.

Quant a l'estructura orgànica (capítol II de la llei), no trobem novetats rellevants que la singularitzin respecte a altres agències autonòmiques que s'han creat amb anterioritat. En l'organització interna s'hi conciten els diferents interessos que hi ha implicats, l'exigència imposada, d'altra banda, en la legislació estatal d'aigües: Administració regional, provincial i, el que és més important, les persones interessades i els usuaris. Els nivells d'organització de l'agència són tres:

- a) Estructura regional amb tres òrgans: presidència, Consell d'Administració (com a òrgan superior de planificació i programació) i direcció-gerència.
- b) Descentralització local: serveis provincials per exercir les funcions en aquest àmbit territorial.
- c) L'òrgan consultiu i de participació en matèria d'aigua integrat per: representants de l'Administració regional i local, dels usuaris de totes les demarcacions hidrogràfiques que afecten Castella-la Manxa (abastament, agrícoles, ramaders, industrials, forestals i recreatius) que han de ser, com a mínim, un terç del total del Consell, més els representants de les organitzacions empresarials, socials, mediambientals, universitats i experts de reconegut prestigi en matèria d'aigües. La regulació de les funcions, la composició i el funcionament remetent a la llei i resta de normes que definitivament despleguin i aprovin l'estatut de l'Agència i dels diferents òrgans auxiliars.

En conclusió, ens sembla destacable la justificació de l'estructura de l'Agència que s'introdueix en el penúltim considerant de l'exposició de motius, amb un rerefons polític evident que reflecteix les vicissituds per les quals ha hagut de passar —i continua passant— la nostra situació hídrica i les deficiències de participació en els òrgans col·legiats de l'aigua que Castella-la Manxa denuncia des de fa temps sense gaires resultats. En aquest paràgraf s'hi assenyalen fets tan obvis com reals, però implícitament ens suggereix un nou escenari d'actuació pel qual aposta la comunitat autònoma. Per més que calgui esperar l'aprovació final del nostre Estatut d'autonomia nou, encara pendent a les Corts Generals justament per la manca d'acord respecte a les reivindicacions legítimes en matèria hídrica —per cert, idèntiques a les que altres estatuts de nova fornada han incorporat sense tants obstacles—.

Pensant en la resolució final d'aquest conflicte, és oportuna la previsió profutur de l'exposició de motius i de l'art. 2.1 de la llei en advertir de la vigència de la norma i de l'estructura organitzativa prevista per exercir tant les competències actuals com les que en el futur pogués assumir l'Agència de l'Aigua de Castella-la Manxa, se n'hi transferissin o se n'hi passessin a gestionar. No està de massa recordar que el projecte de reforma del nostre Estatut d'autonomia preveu la creació d'aquesta agència en l'art.105 com a contingut de les competències de la secció primera, "La política de l'aigua".

D'altra banda, la discutible decisió orgànica d'eliminar del Govern autonòmic la Conselleria de Medi Ambient i repartir-ne les competències entre Indústria i Agricultura no augurava bons presagis sobre el desplegament concret de determinades polítiques ambientals a Castella-la Manxa. Tot i que en podríem anomenar altres exemples, volem parlar atenció en la crisi crònica que pateix l'Organisme Autònom d'Espais Naturals. Amb la direcció interina després del cessament de l'anterior directora (Sra. Ana Terol) i la falta de pressupost efectiu per invertir (dedicat exclusivament a saldar deutes anteriors), no ha pogut renovar pràcticament cap conveni ni amb ajuntaments ni amb altres organitzacions, i s'ha vist obligat a retardar la tramitació i l'aprovació de noves iniciatives ambientals que s'havien compromès a la comunitat autònoma (com l'ampliació de la Xarxa d'Espais Protegits o el Pla de Recuperació de l'ÀguilaCuabarrada). A més a més, comença a ser preocupant la seva relegació en afers de transcendència ambiental indubtable (nous plans eòlics, política d'incendis en espais protegits, o els problemes de sostenibilitat dels plans de caça per l'ús de verins nocius).

4. Execució: nous plans i noves estratègies enfront del canvi climàtic

Les novetats més destacables d'aquest període són tres. D'una banda, l'aprovació del Pla de Gestió de Residus Urbans de Castella-la Manxa per a l'horitzó temporal 2009-2012 mitjançant el Decret 179/2009, de 24 de novembre. En el marc de les polítiques contra el canvi climàtic, les accions estratègiques són dues: l'Estratègia Marc per al Desenvolupament Energètic de Castella-la Manxa i l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible, el projecte de les quals s'està sotmetent als diferents tràmits d'informació i de participació que es requereixen per aprovar-se.

El Pla de Gestió de Residus Urbans de Castella-la Manxa 2009-2019 substitueix l'anterior Pla de 1999 (Decret 70/1999, de 25 de maig) la vigència del qual acabava l'any 2009. Un cop establertes les eines bàsiques d'organització, de gestió i d'infraestructures, el nou pla pretén ordenar la gestió de residus urbans fins a l'any 2019, adaptant-la a les tendències més actualitzades pel que fa a la prevenció en la generació i a la gestió sostenible. La revisió era necessària per incorporar els nous condicionants de caràcter normatiu que han sorgit des de 1999 i adaptar-los a les peculiaritats de la nostra comunitat autònoma. Fonamentalment, per les revisions de la Llei estatal 10/1998, de 21 d'abril de residus amb la seva normativa de desplegament i de la nova Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre, sobre residus, així com de la nodrida política europea sobre la matèria.

Inspirat clarament en aquest cos normatiu, el pla es dicta en virtut de les competències que s'atribueixen a la Junta de Comunitats en l'art. 32.7 i de conformitat amb la norma estatal que remet a les autoritats autonòmiques l'elaboració dels plans autonòmics de residus, l'autorització, la vigilància, l'inspecció i la sanció de les activitats de producció i gestió de residus i a les entitats locals, com a servei obligatori, la recollida, el transport i l'eliminació de residus, podent elaborar els seus propis plans de gestió sempre ajustant-se al que disposa el pla regional. Al seu torn, la nova Directiva de 2008 obliga els estats a establir mesures de protecció ambiental i de salut humana mitjançant la prevenció i reducció dels impactes adversos de la generació i gestió dels residus, la reducció dels impactes globals de l'ús dels recursos i la millora i eficiència del seu ús. En concret, l'art.28 de la directiva determina que els estats membres han de garantir que les autoritats competents estableixin els plans de residus necessaris regulant els principis bàsics que han de contenir.

En resum, el segon Pla de Gestió de Residus Urbans té una vigència de 10 anys i ha de suposar una inversió de 223 milions d'euros entre inversió pública i privada. En compliment de les directrius de la política de desenvolupament sostenible del Govern de Castella-la Manxa, aquest pla ha de representar un avanç imponent, en preveure la reducció fins en un 11%, a l'horitzó 2019, de la generació de residus urbans mitjançant l'aplicació dels següents principis bàsics: a) Prevenció en la generació de residus amb programes eficaços d'educació ambiental, conscienciació i sensibilització. És destacable que és el primer pla autonòmic espanyol que incorpora un autèntic programa de

prevenció d'acord amb la nova directiva europea sobre residus; b) Reutilització, reciclatge i valoració energètica; c) Eliminació.

Al mateix temps, El Govern de Castella-la Manxa es compromet amb el Pacte contra el canvi climàtic a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant la minoració del volum de residus que acaben a l'abocador, com a conseqüència de la prevenció en la generació i de l'optimització dels centres de tractament. La reducció progressiva ha d'adaptar-se a aquestes previsions: del 64% el 2012; del 73% el 2015; del 75% el 2019. Al mateix temps, s'ha de triplicar l'eficàcia de les plantes de tractament, preveient que el volum de residus amb destí a l'abocador es redueixi fins a un 75%. I, per tant, també l'impacte ambiental.

El pla ha previst tres fases d'aplicació i espera aconseguir al final del període d'execució els objectius següents: evitar la generació de 65 kg per habitant/any; el reciclatge de 159 kg habitants/any; que la recollida de matèria orgànica arribi al 45%; que l'abocament final a l'abocador no superi els 111 kg per habitant/any; la recollida del 80% de l'oli vegetal usat per tractar-lo; la universalització de la Xarxa de Punts Nets, amb la construcció de 177 de nous; que les emissions de gasos d'efecte hivernacle, generades per abocadors es redueixin de les 314,8 milers de tones que s'emetrien si no s'aprovés el Pla a les 79,6 milers de tones, la qual cosa suposa una reducció de 74,7% de les emissions al final del període.

Finalment, ha d'assenyalar-se que aquest pla es complementa amb els següents plans: Pla de Residus de Construcció i Demolició; Pla de Fangs de Depuradores i Pla de Residus Industrials (en elaboració, i que substituirà l'actual Pla de Residus Perillosos).

D'altra banda, en espera de la seva aprovació final, destaquem que durant aquest període s'ha elaborat el document que conté l'Estratègia de Mitigació i Adaptació enfront del Canvi Climàtic a Castella-la Manxa, l'esborrany de la qual ha estat sotmès a informació i a participació pública en el *Diari Oficial* fins al 23 de gener de 2010. Aquest document és fruit del Pacte Regional de Desenvolupament Sostenible que es va signar el 7 d'octubre de 2009. Compta amb un total de 290 mesures, de les quals 220 són de mitigació, 65 d'adaptació i 5 de cooperació al desenvolupament, té com a objectiu primer reduir l'emissió regional de CO₂ en 3,2 milions de tones a l'horitzó 2012. A més a més, conté un panell de 46 indicadors per realitzar el seguiment i l'avaluació d'aquestes mesures, així com d'un procés de revisió per reajustar objectius i

mesures fins al 2020 en funció de l'avaluació i dels possibles compromisos del Govern d'Espanya i de la Unió Europea.

L'elaboració del Pacte ha comptat amb un grau elevat de participació: dels agents socials i econòmics de Castella-la Manxa, les administracions locals, la universitat regional, les associacions de veïns i consumidors, les associacions agràries i ecologistes —tot i que finalment aquests s'han retirat de la signatura de l'Estratègia—, els partits polítics i, fins i tot, ciutadans particulars que s'han anat sumant al llarg d'aquests dos mesos. L'esborrany de l'estratègia és un document de treball que pot consultar-se a les dependències de l'Oficina de Canvi Climàtic de la Conselleria d'Indústria, Energia i Medi Ambient, i al web del Govern de Castella-la Manxa (www.jccm.es), on els interessats poden remetre els suggeriments via correu electrònic aplicant les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC).

En aquesta línia, ha de destacar-se l'Estratègia Marc per al Desplegament Energètic de Castella-la Manxa (pla temporal 2009-2012), que s'emmarca en les mesures de desplegament i aplicació de la Llei 1/2007, de 15 de febrer, de foment de les energies renovables i incentivació de l'estalvi i l'eficiència energètica a Castella-la Manxa, amb la qual la nostra regió es va convertir en la primera comunitat autònoma a atorgar la màxima cobertura legal a les accions relacionades amb aquesta matèria.

L'estratègia energètica pretén impulsar un nou model productiu, tal com es recull en el pacte per Castella-la Manxa que ha signat el president Barreda amb els agents socials, els empresaris i les diputacions durant aquest any. Un model econòmic “basat en la sostenibilitat, en la producció d'energies netes, que contribueixin a pal·liar els efectes del canvi climàtic, i el foment i la consolidació d'una indústria innovadora i competitiva”.

L'Estratègia se centra en tres eixos:

1. Foment de la producció d'energia procedent de fonts renovables. Amb l'horitzó temporal 2012, els objectius són:

- Que el 100% de l'energia elèctrica que es consumeixi procedeixi de fonts renovables, amb una inversió prevista de 9.000 milions d'euros aproximadament. (Actualment el 70% de l'energia elèctrica procedeix de fonts renovables).

- Que el 37% de l'energia elèctrica produïda vingui de fonts renovables.

2. Estalvi i eficiència energètica, amb aquestes mesures: incrementar l'eficiència energètica de les nostres empreses; posar en marxa plans sectorials d'estalvi energètic; disminuir les emissions de CO₂ a l'atmosfera.

Fins a l'any 2012 el Govern de Castella-la Manxa, en col·laboració amb l'IDAE, ha d'invertir més de 110,5 milions d'euros en polítiques d'estalvi i eficiència energètica, que es tradueixen en mesures concretes, com la inversió de 14,6 milions d'euros per millorar l'eficiència de serveis públics o l'eficiència energètica d'edificis públics en més de 500 ajuntaments, les auditories energètiques en 200 edificis de la Junta de Comunitats, els 100.000 de Castella-la Manxa que han canviat els seus electrodomèstics per altres de més eficients gràcies al Pla Renove amb una inversió de 9,4 milions d'euros o els més de 6 milions invertits a impulsar sistemes de transport alternatius i a ajudar a modernitzar les flotes d'algunes indústries i vehicles particulars a través de les convocatòries per millorar l'eficiència i l'estalvi energètic en el sector del transport.

3. Incrementar el pes econòmic dels actius energètics en l'economia de Castella-la Manxa: la nostra comunitat autònoma produeix el 7,8% de l'energia elèctrica nacional (dades consolidades de 2008), però consumeix el 4,3%, la qual cosa ens converteix en una regió excedentària en energia que exporta 10.708 GWh. L'objectiu és consolidar aquesta situació, amb un objectiu de creixement en el valor de l'energia exportada fins a 1.650 milions d'euros, així com del valor afegit brut del sector energètic en un 15%.

No obstant això, aquesta estratègia marc no compta amb tot el suport de la societat ni, sobretot, dels col·lectius ecologistes. Fins al punt que justament l'aprovació ha motivat l'abandó i la retirada de la signatura d'aquests detractors en l'Estratègia de Canvi Climàtic que acabem d'analitzar, per haver-la considerat incompatible amb els pressupostos insostenibles de l'estratègia per al desplegament energètic que intenta justificar la impossibilitat de reduir les emissions en la nostra regió (donada la dependència en la producció d'energia de les tèrmiques i del transport viari). Segons s'ha denunciat, l'aposta de Castella-la Manxa per l'increment de centrals tèrmiques o nuclears, noves indústries contaminants i infraestructures de transport per carretera ha de suposar un increment encobert de l'excés d'emissions de CO₂ fins als 5,5 milions de tones l'any 2012 (tot això quan el 2007 la nostra comunitat autònoma ja va ser la quarta en emissions GEI per habitant i l'emissió de 28 milions de tones equivalent de CO₂ allunyant-se dels objectius de Kyoto en més del 30%).

5. Altres mesures d'execució d'ordre menor

En aquest període, també s'han modificat algunes normes executives d'acord amb criteris transversals d'ordre mediambiental. Sense aturar-nos-hi gaire, cal esmentar l'Ordre de 19 de gener de 2010, de la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural, que modifica l'anterior Ordre de 14 de novembre de 1994, per declarar la truita comuna espècie d'interès preferent i establir la delimitació d'aigües truíteres. I això d'acord amb les exigències imposades per la Llei 1/1992, de 7 de maig de pesca fluvial de Castella-la Manxa, que estableix entre els seus objectius la protecció, la conservació, el foment i l'ordenat aprofitament dels recursos de la pesca en els cursos i masses d'aigua de la regió.

També basant-se en l'art. 27 de la llei de pesca fluvial, que disposa l'establiment anual per la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural de l'ordre de vedes, l'Ordre de 20 de gener de 2010 recull la relació d'espècies objecte de pesca, les èpoques hàbils, les talles límit de captura, el nombre màxim de captures per pescador i d'esquers autoritzats per a cada espècie, les espècies comercialitzables i les limitacions i prohibicions especials, així com la delimitació i la reglamentació establerta per a les aigües en règim especial i refugis de pesca establerts en els diferents cursos i masses d'aigua de l'àmbit territorial de Castella-la Manxa. Aquest tipus de normes tenen especial importància des del punt de vista mediambiental, perquè es coneix la influència que la fauna pot tenir en la conservació i en el futur manteniment del valor ecològic de les masses hídriques. Així, arran de les propostes elaborades per les corresponents delegacions provincials de la Conselleria d'Agricultura i Desenvolupament Rural i informades pels respectius consells provincials de pesca i oït el Consell Regional de Pesca, l'ordre regula, seguint un criteri territorial provincial: les espècies que es poden pescar, les invasores o exòtiques (amb especial atenció en el cranc vermell) i les amenaçades, els períodes hàbils, els esquers admesos i prohibits depenent de l'espècie i de la seva influència en les condicions hidrològiques dels diferents cursos d'aigua, les quotes de captura, la comercialització i les disposicions relatives a moratòries temporals i prohibicions especials.

Com a conclusió, cal destacar la Llei 1/2010, d'11 de març, de regulació de la taxa per a la concessió de l'etiqueta ecològica a Castella-la Manxa, que desplega en l'ordenament autonòmic les previsions comunitàries relatives a aquest cànon, en aplicació del Reglament (CE) 66/2010, del Parlament Europeu del Consell, de 25 de novembre de

2009, relatiu a l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. Aquesta norma, com és sabut, pretén promoure productes i serveis que puguin reduir els efectes ambientals adversos, en comparació amb altres productes de la mateixa categoria, i contribueix així a l'ús eficaç dels recursos, a incentivar-ne l'ús i a l'elevat nivell de protecció del medi ambient. En aquest context, la realització d'un contracte amb el sol·licitant de l'etiqueta i el pagament del cànon de concessió constitueix el pressupost mateix de la concessió de l'etiqueta ecològica amb relació a un producte concret. L'import del cànon es fixa en el marc normatiu establert pel Reglament (CE) núm. 66/2010 de 25 de novembre de 2009.

L'import de la taxa es fixa en 200 euros per cada sol·licitud, i se n'encarreguen de la gestió els òrgans de la conselleria competents en matèria de medi ambient. Tot i que aquesta quantia serà objecte de bonificació del 20% per als subjectes passius que acreditin disposar de la validació pel Reglament EMAS o de la certificació per la Norma ISO 14001, i es comprometen, en la seva política mediambiental, a incorporar una referència expressa al compliment dels criteris de l'etiqueta ecològica que han servit de base a la concessió.

Per acabar, la Llei 1/2010, en la disposició final primera modifica la Llei 4/2007, de 8 de març, d'avaluació ambiental a Castella-la Manxa. I en concret, l'art. 48, per establir com a termini màxim resoldre i notificar la resolució dels procediments sancionadors referits a les infraccions greus i molt greus un any des de l'inici del procediment i tres mesos per a les lleus.

6. Problemes: cementiris nuclears, transvasaments i aiguamolls, política hidràulica i l'etern dilema “ecologia *versus* desenvolupament”

Com en tants altres terrenys, la conjuntura de crisi econòmica ha estat un factor determinant l'any 2009 i s'espera que ho continuarà sent durant l'any següent, també, per a la política ambiental. Si d'una banda aquesta ha aparcat algunes amenaces, com l'expansió urbanística, de l'altra pot encoratjar la temptació social i política de sacrificar la tutela ambiental en nom d'una recuperació econòmica més gran.

L'exemple paradigmàtic que ha sorgit en aquest període ha estat la presentació de les candidatures de Yebra (Guadalajara) i Villar de Cañas (Conca) per instal·lar el magatzem temporal de residus nuclears (ATC, col·loquialment anomenat “cementiri

nuclear”), destinat a acollir els residus radioactius de les centrals nuclears espanyoles durant seixanta anys. I, com era d’esperar, s’ha convertit en motiu de controvèrsia.

Al capdavant de l’oposició s’hi ha col·locat el Govern autonòmic, que ha incidit en una estratègia de legitimació política regional recurrent. A banda dels riscos eventuais d’una instal·lació d’aquesta mena (seguretat, salut, trasllat), en els casos dels dos municipis regionals candidats s’addueix l’existència de valors ecològics importants. Per la seva banda, el Ministeri d’Indústria i ENRESA prometen compensacions econòmiques milionàries: sis milions d’euros anuals al municipi que l’aculli i uns quants més a la comarca. Caldrà esperar encara per saber com es resol aquest conflicte d’indubtables repercussions ambientals, perquè en depèn el funcionament de les centrals nuclears.

Des del prisma del desenvolupament sostenible, es continuen qüestionant els projectes d’autovia Toledo-Ciudad Real i Conca-Terol. Respecte del primer, després de la declaració d’impacte negatiu pel Ministeri de Medi Ambient al projecte inicial, els tres traçats alternatius no aporten diferències significatives, perquè suposen obrir un nou corredor de comunicació viària en zones d’alt valor ecològic que formen part de Xarxa Natura 2000 (els ZEPA i LIC de les muntanyes de Toledo). En espera que la conselleria es pronunciï sobre la DIA del projecte, les veus que en reclamen la reconsideració són cada cop més. El fraccionament eventual d’aquesta infraestructura per evitar la declaració completa de l’impacte seria, segons el nostre parer, un frau de llei evident, que haurà de seguir-se atentament.

D’altra banda, la situació més crítica de la història del PN de Las Tablas de Daimiel, agreujada per l’incendi de les torberes a l’octubre de 2009, ha intentat al principi ser drecera mitjançant un transvasament d’emergència des del Tajo a través de l’anomenada “canonada manxega”. Emperò, la recuperació total de l’entollada s’ha aconseguit gràcies a un hivern plujós inusual. Tot i que ambdós són fets positius, és evident que no constitueixen la solució definitiva al dèficit estructural que pateixen aquest i altres aiguamolls manxecs. De cara a l’objectiu d’aconseguir l’equilibri de sostenibilitat (cosa que implica, a més de no comprometre el futur de les generacions futures, atendre les necessitats de les generacions presents) per a aquests ecosistemes, és prioritari el manteniment dels compromisos adquirits en el Pla Especial de l’Alt Guadiana, dins les dificultats pressupostàries actuals.

Si bé és molt important, no és sinó un problema més dels que hi ha a les conques hidrogràfiques a què pertany el territori de Castella-la Manxa. Exhaurit el termini en què

haurien d'haver-se aprovat els nous plans hidrològics, la seva elaboració es troba amb grans dificultats. Especialment a la Demarcació Hidrogràfica Xúquer, per la negativa de les comunitats autònomes concernides a exercir les seves competències estatutàries en les conques intracomunitàries. Darrere els esculls jurídics hi són, sens dubte, les pretensions materials relatives a l'aprofitament dels recursos hídrics, perquè la Generalitat Valenciana menysprea les alternatives que ha ofert el Ministeri de Medi Ambient (dessaladores, depuració i reutilització d'aigües residuals, transvasament al Vinalopó, modernització de regadius, etc.) i, mentre arriba el transvasament de l'Ebre, aspira a utilitzar el Xúquer per resoldre els dèficits estructurals d'aigua en el conjunt d'aquesta regió; la qual cosa passaria per restablir en el seu profit el blindatge sobre la pràctica totalitat dels cabals superficials de la conca del Xúquer que de facto ja gaudeix, i retallar les escasses dotacions d'aigües subterrànies amb què sobreviu el regadiu a la Manxa oriental. Una ambició vella que apareix ara revestida del propòsit ecològic de salvar l'albufera de València, amenaçada per la pressió urbanística i pels abocaments urbans i agrícoles contaminants.

No podem saber quin serà el desenllaç final, però és evident, segons el nostre parer, que una planificació hidrològica, desitjable, consensuada i estable només pot aconseguir-se des del respecte a la Constitució i basant-se en el repartiment equitatiu, raonable i sostenible dels recursos hídrics.